



# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

## CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XV LEGISLATURA

Serie B:  
PROPOSICIONES DE LEY

15 de marzo de 2024

Núm. 75-1

Pág. 1

### PROPOSICIÓN DE LEY

**122/000064 Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.**

**Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano**

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(122) Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso.

Autor: Grupo Parlamentario Republicano

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta los antecedentes incorporados mediante escrito número de registro 15391, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2024.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Fernando Galindo Elola-Olaso**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria para su debate en Pleno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2024.—**Teresa Jordà i Roura**, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Republicano.

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA

Exposición de motivos

Las movilizaciones y las protestas de los agricultores las últimas semanas son una reacción desesperada a todas las demandas desatendidas que gran parte del sector primario viene reclamando los últimos años. Entre otras reclamaciones, es primordial señalar la necesidad del sector de mejorar el valor la cadena alimentaria para garantizar precios justos en los productos y poder vivir dignamente de la agricultura. En este sentido, la Ley de la Cadena Alimentaria actual, no cubre dichas expectativas.

Los agricultores critican que la vigente Ley de la Cadena Alimentaria, que entre otras cuestiones ha intentado evitar ventas por debajo del precio de mercado, no está siendo eficaz. Dicha norma fue modificada en febrero de 2020 después de una oleada de protestas alrededor de todo el Estado español y buscaba, por un lado, acabar con las prácticas desleales para que los precios que los agricultores cobran por sus productos cubran los costes de producción, y por el otro, conseguir que se ejerciera un mayor control por parte de la Agencia de Información y Control Alimentario. Con todo, la ineficacia de esta norma para solventar dicha problemática ya se viene probando desde su entrada en vigor y, en consecuencia, los agricultores venden a pérdidas desde hace cuatro años. Es más, cualquier intento de aplicación de la vigente ley en su redactado actual sobre un sector en crisis lleva a una única conclusión, el problema se perpetúa. Las razones, fundamentalmente, son que falta claridad en sus objetivos y que existe una enorme dificultad para llevarla a la práctica.

Por lo cual, el sector reclama una modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y, a su vez, una aplicación firme de la norma, de manera que se obligue a pagar unos precios en origen que al menos cubran los costes de producción. Asimismo, ven fundamental que la cumpla también la gran distribución, es decir, el final de la cadena.

En la ley actual no se resuelve la cuestión de la posición de dominio ni se establece el valor de los diferentes eslabones que conforman la cadena alimentaria: desde el productor, pasando por la industria, hasta la distribución. De la misma manera, tampoco se prohíbe la práctica comercial de la reventa a pérdidas, tal como establece la DIRECTIVA (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, y se ha querido condicionar su prohibición en base a si se considera leal o desleal. En cambio, en esta propuesta se plantean cambios normativos en estos ámbitos que permitirían aproximarnos al modelo francés, italiano o belga de eliminar definitivamente esta práctica tan perjudicial para el productor primario que solo favorece a la gran distribución.

Resulta muy importante destacar también las cargas burocráticas generadas por el vigente registro de contratos alimentarios, que además de suponer una traba que dificulta la actividad laboral diaria de los operadores de la cadena, no resulta ser una herramienta de provecho debido a la imposibilidad de explotar los datos que contiene con finalidad de control, pero también estadística.

Más aún, otra de las grandes críticas a la ley actual es la falta de definición de unos indicadores oficiales de referencia para poder calcular los costes de producción que se tienen que cubrir al productor primario.

Por ende, todo esto hace muy difícil la defensa de los intereses de los productores, puesto que para acreditar que el precio que se les ofrece por sus productos no cubre los costes de producción, tienen que presentar individualmente el análisis de costes de su explotación. Al margen de las dificultades que esto comporta, en el caso de que se haga tampoco es ninguna garantía que se acabe ejecutando el contrato, puesto que el comprador puede optar por ir a otro productor que le firme el contrato a un precio más bajo.

El sector considera que para limitar los abusos y competencias desleales que sufren los agricultores en la cadena alimentaria, es imprescindible que estén limitadas y sancionadas las conductas cada vez más reiteradas de ventas a precios extremadamente

bajos a los consumidores de productos alimentarios. Aprovechando que en este segmento del comercio minorista (hipermercados, supermercados y grupos empresariales de los mismos) ya se comercializan la mayoría de esos productos, debe regularse, la prohibición de la reventa a pérdidas en la cadena alimentaria.

Además, cabe recordar que la gran mayoría de formaciones políticas representadas en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, en la votación en el Pleno del Parlamento Europeo del 23 de octubre del 2020 votaron favorablemente a la enmienda 246 sobre la regulación en la Política Agraria Común (PAC) de la reventa con pérdidas en la propuesta de modificación de la Organización Común de Mercados (OCM) de los productos agrarios, la cual obtuvo 603 votos a favor, 75 votos en contra y 14 abstenciones. Por lo tanto, en coherencia con esa posición política y de acuerdo con lo establecido en la Directiva Europea 2019/633, los Estados miembros disponen de la facultad de introducir normas más ambiciosas que las previstas en dicha Directiva.

El artículo 208 del Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios (en adelante, la OCM de los productos agrarios) define específicamente para los productos incluidos en la PAC lo que se entiende por «posición dominante». Dicha OCM se dicta de acuerdo con lo establecido en el párrafo primero del artículo 42 y el apartado 2 del artículo 43 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Todo ello por cuanto, de acuerdo con la letra d) del apartado 2 del artículo 4 del mismo Tratado la agricultura es una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros.

Por lo cual, la Ley 12/2013 que es objeto de reforma, es el marco adecuado para establecer el porcentaje de cuota de mercado en la cadena alimentaria que supone disponer de posición dominante, ya que esta Ley desarrolla en el Estado español la competencia compartida prevista en el artículo 168 de la OCM de los productos agrarios. Lo mismo ocurre con el mencionado artículo 208 de la OCM, puesto que acotar quien goza de una posición de dominio permite actuar contra quien se sirva de ella para ejercer prácticas abusivas.

Esto es, las diferencias en el poder de negociación, que se corresponden con la dependencia económica del proveedor respecto del comprador, provocan que los agentes más grandes impongan prácticas comerciales desleales a los agentes más pequeños.

Para que las autoridades puedan sancionar abusos de posición de dominio, primero deben tener establecido con qué cuota de mercado se tiene posición de dominio. Como para los productos agrarios y agroalimentarios no está establecido, hasta la fecha no se ha tenido en cuenta que los ingresos agrarios están sujetos a las condiciones de estrecha relación entre la cosecha y el precio, la inelasticidad de la demanda en relación con el precio, el carácter aleatorio de la oferta y la homogeneidad del producto.

Ese fenómeno, que es común en países de nuestro entorno, ha propiciado que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo mediante distintas comunicaciones hayan ido profundizando en el análisis y en la identificación de los problemas reales. A todas estas iniciativas se han sumado otras instituciones europeas, como el Consejo de Ministros de Competitividad y Agricultura o el Comité Económico y Social, que han evidenciado la gravedad y extensión global de este problema, subrayando la necesidad de que los Estados adopten medidas, ampliando el marco normativo significativamente en tiempos recientes, con una apuesta esencial en favor del reequilibrio de la cadena y ampliando notablemente el margen de acción para los Estados miembros.

Una dificultad añadida que cabe destacar es que la situación real del campo no se ha visto reflejada en las estadísticas oficiales por deficiencias en los mecanismos de captura de datos. Hoy en día, la Comisión Europea no cuenta con los elementos de juicio necesarios para responder a una situación de perturbación real del mercado en el Estado español. Por ello, pese a la constatación en origen de importantes caídas en los precios cuando hay situaciones de crisis de costes, ha sido especialmente difícil que se aplicaran las medidas extraordinarias de gestión de crisis previstas en el marco de la OCM de los productos agrarios.

Por estos motivos es preciso disponer de herramientas veraces que tengan el respaldo legal de las normas estadísticas, impongan la transparencia a los operadores en la información requerida por las administraciones y sean fiables a la hora de trasladar la verdadera situación de los mercados y costos, así como, garanticen a todos los operadores que la información empresarial suministrada queda protegida bajo el secreto estadístico.

Por todo lo expuesto, se propone la modificación del artículo 9 y del artículo 12 ter, para dotar a las cooperativas u otras entidades asociativas de mayor poder negociador, e incluir los costes reales de producción de los productores incluidos en entidades asociativas en el cálculo de los costes de producción a nivel de entidad asociativa.

A su vez, con el redactado planteado, se modifica el punto 2 del artículo 11bis para simplificar administrativamente el registro de contratos alimentarios, eliminando la obligación del registro inmediato y suponiendo esto un alivio en cuanto a la carga administrativa para los operadores de la cadena.

Además, se incorpora un artículo 12 quater nuevo dedicado en exclusiva a la prohibición de la reventa a pérdidas en la cadena alimentaria, la cual también incorpora en su definición, tanto el precio de compra del producto como los costes fijos y variables de la comercialización de los alimentos. Excepción hecha de ante los consumidores, por estar esta situación ya regulada en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

En consiguiente, con el objetivo de dar robustez y seguridad jurídica a la nueva prohibición propuesta, se modifica el artículo 23 de manera que la reventa a pérdidas pasa a considerarse una infracción grave en materia de contratación alimentaria.

Asimismo, se establece a través de la nueva disposición adicional octava, el porcentaje de cuota de mercado en la cadena alimentaria que supone disponer de posición dominante, posibilitando de esta manera acotar y actuar contra quien se sirve de ella para realizar alguna de las prácticas abusivas recogidas en la vigente Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

También, se introduce una nueva disposición adicional novena, por la cual se incluye un mecanismo de definición de estándares de costes de producción medios, homologables a nivel de estado, para que puedan ser el punto de partida de la negociación y formalización de cualquier contrato.

Por último, a través de una nueva disposición transitoria tercera, se aplicará un coeficiente inicial del diez por ciento mientras el ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y alimentación no determine el coeficiente o coeficientes, por producto o sector, previstos en el segundo párrafo del artículo 12.

Por todo ello se presenta la siguiente Proposición de Ley.

*Artículo único. Modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.*

Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria queda modificada como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado 3 bis al Artículo 2. Ámbito de aplicación, que queda redactado como sigue:

«3 bis. El ámbito de aplicación del capítulo II del título II de esta ley también será de aplicación a los depósitos mercantiles de productos agrícolas y alimentarios regulados en el Código de Comercio, así como los apartados 1 y 2 del artículo 8 y las letras a), b), d), e), f), g), h), i), k) y l) del apartado 1 del artículo 9.»

Dos. Se modifica el apartado c) del punto 1 del Artículo 9. Condiciones contractuales, que queda redactado como sigue:

«c) Precio del contrato alimentario, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los descuentos aplicables, que se determinará en cuantía fija y/o variable, en función únicamente de factores objetivos, verificables, no manipulables y

expresamente establecidos en el contrato, que en ningún caso puedan ser manipulables por el propio operador u otros operadores del sector o hacer referencia a precios participados.

El precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o la cooperativa u otra entidad asociativa o coste efectivo de producción, que incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad, entre otros, el coste de semillas y plantas de vivero, fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas, combustibles y energía, maquinaria, reparaciones, costes de riego, alimentos para los animales, gastos veterinarios, amortizaciones, intereses de los préstamos y productos financieros, trabajos contratados y mano de obra asalariada o aportada por el propio productor o por miembros de su unidad familiar y otros costes de funcionamiento de la cooperativa u otra entidad asociativa.

La determinación del coste efectivo habrá de realizarse tomando como referencia el conjunto de la producción comercializada para la totalidad o parte del ciclo económico o productivo, que se imputará en la forma en que el proveedor considere que mejor se ajusta a la calidad y características de los productos objeto de cada contrato.»

Tres. Se modifica el punto 2 del Artículo 11 bis. Registro de contratos alimentarios, que queda redactado como sigue:

«2. El operador que compre a los productores primarios y las agrupaciones de éstos estará obligado a inscribir cada contrato alimentario que realice, y sus modificaciones, por los medios electrónicos que se dispongan reglamentariamente, en un plazo de tres meses desde la entrega del producto objeto del contrato cuando se trate de un contrato con entregas continuadas, o al mes en caso de entregas puntuales.»

Cuatro. Se modifica el punto 1 del Artículo 12 ter. Destrucción de valor en la cadena, que queda redactado como sigue:

«1. Con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador. La acreditación se realizará conforme a los medios de prueba admitidos en Derecho.

A los efectos de acreditación de estos costes de producción en el sector primario, los operadores podrán utilizar los valores que, para cada producto y campaña sean publicados por los organismos estatales que tengan atribuida esta función, así como los observatorios alimentarios oficiales que realizan esta función en los respectivos territorios de las comunidades autónomas.»

Cinco. Se añade un nuevo Artículo 12 quater. Reventa con pérdida, que queda redactado como sigue:

«Artículo 12 quater. *Reventa con pérdida.*

1. En las actividades de comercio o la transformación de productos agrarios y alimentarios, no se podrán ofrecer ni realizar reventas con pérdida.

2. Esto no será aplicable a los productores agropecuarios cuando vendan de forma directa a los consumidores como al resto de la cadena alimentaria, incluidas las entregas a las cooperativas y organizaciones de productores de las que sean miembros.

3. A los efectos señalados en el párrafo anterior se considerará que existe reventa con pérdida, cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que

figuren en la misma, si estos se corresponden con las prácticas comerciales leales y de buena fe, incrementado por los costes fijos y variables efectivos, como el almacenamiento, la preparación, el envasado, la transformación o comercialización, incluidos los realizados por el propio comprador, así como las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación.

4. No obstante, dado que comporta dificultades prácticas establecer los costos fijos y variables efectivos de cada operador, el ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y alimentación establecerá de acuerdo con criterios objetivos y basados en estudios actualizados sobre la cadena alimentaria, un coeficiente o coeficientes para determinarlos.

5. No se computarán, a los efectos de la deducción en el precio a que se refiere el párrafo anterior, las retribuciones o las bonificaciones de cualquier tipo que signifiquen compensación por servicios prestados.

6. En ningún caso, las ofertas conjuntas o los obsequios a los compradores podrán utilizarse para evitar la aplicación de lo dispuesto en este artículo.»

Seis. Se añade una nueva letra r) en el punto 2 del Artículo 23. Infracciones en materia de contratación alimentaria, con el siguiente contenido:

«r) La realización de ofertas o de reventas con pérdida de forma contraria a lo establecido en el artículo 12 quarter.»

Siete. Se añade una nueva disposición adicional octava, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional octava. *Posición dominante.*

A efectos de lo previsto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, se entenderá por “posición dominante” en la cadena alimentaria la posición de fuerza económica de que disfruta una empresa y que le permite obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado, al disponer de una cuota del 8% que le da el poder para actuar con una considerable independencia frente a sus competidores, clientes y, en última instancia, frente a los consumidores.»

Ocho. Se añade una nueva disposición adicional novena, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional novena. *Determinación de costos y precios indicativos.*

Con el fin de disponer de mecanismos oficiales de captación de costos indicativos, a los efectos de lo establecido en las letras c) y j) del apartado 1 del artículo 9 y de los artículos 12 ter y 12 quarter, así como precios indicativos, todos ellos válidos estadísticamente:

a) Se establece el carácter obligatorio de los datos estadísticos para la determinación de los costos a los efectos de lo establecido en las letras c) y j) del apartado 1 del artículo 9 y de los artículos 12 ter y 12 quarter, así como, de los precios que las normas de la política agrícola común establecen de notificación obligatoria a la Comisión Europea.

b) La elaboración de los datos estadísticos previstos en la letra a) anterior corresponde al ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y alimentación.

c) El colectivo de personas físicas y jurídicas que abarca la obligación establecida en la letra a) anterior como universo estadístico son los operadores del sector alimentario pertenecientes a la cadena alimentaria española, entre los cuales el ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y alimentación establecerá una muestra estadísticamente representativa.

# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

## CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 75-1

15 de marzo de 2024

Pág. 7

d) El ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y alimentación efectuará las remodelaciones presupuestarias necesarias para atender a la puesta en marcha de la estadística obligatoria establecida en la letra a) anterior en el plazo máximo de un mes des de la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de la presente Ley.

e) En el plazo máximo de seis meses, el ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y alimentación dispondrá de los estudios actualizados para determinar el coeficiente o coeficientes previstos en el artículo 12 quarter.

f) El Gobierno procederá cuanto antes a la modificación del anexo 2 del Real decreto 410/2016, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional, para que a partir de la campaña 2024, la captura de costos y precios de seguimiento del mercado y de la cadena alimentaria española sea incluida en el Plan Estadístico Nacional.

Así mismo, los operadores de la cadena alimentaria española quedarán obligados a suministrar los datos sobre costos y precios que la Administración les requiera. Dicha obligación se desarrollará normativamente en un plazo no superior a tres meses desde la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de la presente Ley.»

Nueve. Se añade una nueva disposición transitoria tercera, que queda redactada como sigue:

«Disposición transitoria tercera. *Coeficiente inicial de los costos fijos y variables.*

Mientras el ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y alimentación no determine el coeficiente o coeficientes, por producto o sector, previstos en el segundo párrafo del artículo 12 ter de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, a los efectos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 ter de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se aplicará un coeficiente inicial del diez por ciento.»

Disposición final primera. *Carácter supletorio.*

La presente Ley reviste carácter supletorio respecto de las disposiciones que las Comunidades Autónomas, al amparo de lo establecido en sus Estatutos de Autonomía, dicten sobre la misma materia.

Se exceptúa el carácter supletorio respecto de los preceptos de la presente Ley dictados al amparo de las competencias exclusivas del Estado, de conformidad con el artículo 149.1 de la Constitución.

Disposición final segunda. *Entrada en vigor.*

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

A la Mesa del Congrés dels Diputats

El Grup Parlamentari Republicà, a instància de la Diputada Teresa Jordà i Roura, a l'empara del que s'estableix en l'article 124 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició de Llei per la qual es modifica la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la Cadena Alimentària pel seu debat en Ple.

Palacio del Congrés dels Diputats, 6 de març de 2024.—**Teresa Jordà i Roura**, Diputada.

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA

Exposició de motius

Les mobilitzacions i les protestes dels agricultors les últimes setmanes són una reacció desesperada a totes les demandes desateses que una gran part del sector primari està reclamant els últims anys. Entre altres reclamacions, és primordial assenyalar la necessitat del sector de millorar el valor de la cadena alimentària per garantir preus justos en els productes i poder viure dignament de l'agricultura. En aquest sentit, la Llei de la Cadena Alimentària actual, no cobreix aquestes expectatives.

Els agricultors critiquen que la vigent Llei de la Cadena Alimentària, que entre altres qüestions ha intentat evitar vendes per sota del preu de mercat, no està sent eficaç. Aquesta norma va ser modificada el febrer de 2020 després d'una onada de protestes al voltant de tot l'Estat espanyol i buscava, per una banda, acabar amb les pràctiques deslleials perquè els preus que els agricultors cobren pels seus productes cobreixin els costos de producció, i per l'altra, aconseguir que s'exerceixi un major control per part de l'Agència d'Informació i Control Alimentari. Amb tot, la ineficàcia d'aquesta norma per solucionar aquesta problemàtica ja s'ha provat des de la seva entrada en vigor i, en conseqüència, els agricultors venen a pèrdues des de fa quatre anys. Encara més, qualsevol intent d'aplicació de la llei vigent al seu redactat actual sobre un sector en crisi porta a una única conclusió, el problema es perpetua. Les raons, fonamentalment, són que falta claredat en els seus objectius i que existeix una enorme dificultat per dur-la a la pràctica.

Per la qual cosa, el sector reclama una modificació de la Llei de la Cadena Alimentària i, al seu torn, una aplicació ferma de la norma, de manera que s'obligui a pagar uns preus en origen que almenys cobreixin els costos de producció. Tanmateix, és fonamental que compleixi també la gran distribució, és a dir, el final de la cadena.

En la llei actual no es resol la qüestió de la posició de domini ni s'estableix el valor dels diferents esglaons que conformen la cadena alimentària: des del productor, passant per la indústria, fins a la distribució. De la mateixa manera, tampoc es prohibeix la pràctica comercial de la revenda a pèrdua, tal com estableix la DIRECTIVA (UE) 2019/633 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2019, relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de subministraments agrícoles i alimentari, i s'ha volgut condicionar la seva prohibició d'acord amb si es considera lleial o deslleial. En canvi, en aquesta proposta es plantegen canvis normatius en aquests àmbits que permetran aproximar-nos al model francès, italià o belga d'eliminar definitivament aquesta pràctica tan perjudicial pel productor primari que només afavoreix a la gran distribució.

És molt important destacar també les càrregues burocràtiques generades pel vigent registre de contractes alimentaris, que a més de suposar una trava que dificulta l'activitat laboral diària dels operadors de la cadena, no resulta ser una eina de profit a causa de la impossibilitat d'explotar les dades que conté amb finalitat de control, però també estadística.

Encara més, una altra de les grans crítiques a la llei actual és la falta de definició d'uns indicadors oficials de referència per a poder calcular els costos de producció que s'han de cobrir al productor primari.

Per tant, tot això fa molt difícil la defensa dels interessos dels productors, ja que per acreditar que el preu que se'ls ofereix pels seus productes no cobreix els costos de producció, han de presentar individualment l'anàlisi de costos de la seva explotació. Al marge de les dificultats que això comporta, en el cas que es porti a terme no és cap garantia que s'acabi executant el contracte, ja que el comprador pot optar per un altre productor que li firmi el contracte a un preu més baix.

El sector considera que per limitar els abusos i les competències deslleials que pateixen els agricultors a la cadena alimentària, és imprescindible que estiguin limitades i sancionades les conductes cada vegada més reiterades de vendes a preus extremadament baixos als consumidors de productes alimentaris. Aprofitant que en aquest segment del

comerç minorista (hipermercats, supermercats i grups empresarials dels mateixos) ja es comercialitzen la majoria d'aquests productes, ha de regular-se la prohibició de la revenda a pèrdua en la cadena alimentària.

A més, cal recordar que la gran majoria de formacions polítiques representades en la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Congrés dels Diputats, en la votació del Ple del Parlament Europeu del 23 d'octubre del 2020 van votar favorablement a l'esmena 246 sobre la regulació a la Política Agrària Comuna (PAC) de la revenda a pèrdues en la proposta de modificació de l'Organització Comuna de Mercats dels productes agraris (d'ara endavant, OCM dels productes agraris), la qual va obtenir 603 vots a favor, 75 vots en contra i 14 abstencions. Per tant, en coherència amb aquesta posició política i d'acord amb el que estableix a la Directiva Europea 2019/633, els Estats membres disposen de la facultat d'introduir normes més ambicioses que les previstes en aquesta Directiva.

L'article 208 del Reglament 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual es crea la Organització Comuna de Mercats dels productes agraris defineix específicament pels productes inclosos en la PAC el que s'entén per «posició dominant». Aquesta OCM es dicta d'acord amb el que estableix el paràgraf primer de l'article 42 i l'apartat 2 de l'article 43 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Tot això atès que, d'acord amb la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 4 del mateix Tractat l'agricultura és una competència compartida entre la Unió Europea i els Estats membres.

Per això, la Llei 12/2013 que és objecte de reforma, és el marc adequat per establir el percentatge de quota de mercat en la cadena alimentària que suposa disposar de posició dominant, ja que aquesta Llei desenvolupa a l'Estat espanyol la competència compartida prevista a l'article 168 de la OCM dels productes agraris. El mateix passa amb el mencionat article 208 de la OCM, atès que acotar qui gaudeix d'una posició de domini permet actuar contra qui es serveixi d'aquesta per exercir pràctiques abusives.

Això és, les diferències en el poder de negociació, que es corresponen amb la dependència econòmica del proveïdor respecte del comprador, provoquen que els agents més grans imposin pràctiques comercials deslleials als agents més petits.

Perquè les autoritats puguin sancionar abusos de posició de domini, primer s'ha d'establir amb quina quota de mercat es té posició de domini. Com pels productors agraris i agroalimentaris no està establert, fins a la data no s'ha tingut en compte que els ingressos agraris estan subjectes a les condicions d'estreta relació entre la collita i el preu, la inelasticitat de la demanda en relació amb el preu, el caràcter aleatori de l'oferta i l'homogeneïtat del producte.

Aquest fenomen, que és comú en països del nostre entorn, ha propiciat que la Comissió Europea i el Parlament Europeu mitjançant diferents comunicacions hagin anat profunditzant en l'anàlisi i en la identificació dels problemes reals. A totes aquestes iniciatives s'hi han sumat altres institucions europees, com el Consell de Ministres de Competitivitat i Agricultura o el Comitè Econòmic i Social, que han evidenciat la gravetat i extensió global d'aquest problema, subratllant la necessitat que els Estats adoptin mesures, ampliant el marc normatiu significativament en temps recents, amb una aposta essencial en favor del reequilibri de la cadena i ampliant notablement el marge d'acció pels Estats membres.

Una dificultat afegida que s'ha de destacar és que la situació real del camp no s'ha vist reflectida en les estadístiques oficials per deficiències en els mecanismes de captura de dades. Avui en dia, la Comissió Europea no compta amb els elements de judici necessaris per respondre a una situació de pertorbació real del mercat a l'Estat espanyol. Per això, tot i la constatació en origen d'importants caigudes dels preus quan hi ha situacions de crisi de costos, ha sigut especialment difícil que s'apliquessin mesures extraordinàries de gestió de crisi previstes en el marc de la OCM dels productes agraris.

Per aquests motius és precís disposar d'eines veraces que tinguin el suport legal de les normes estadístiques, imposin la transparència als operadors en la informació requerida per les administracions i siguin fiables a l'hora de traslladar la veritable situació dels mercats i costos, així com, garanteixin a tots els operadors que la informació empresarial subministrada quedi protegida sota el secret estadístic.

Per tot l'exposat, es proposa la modificació de l'article 9 i de l'article 12 ter, per dotar a les cooperatives o altres entitats associatives de major poder negociador, i incloure els costos reals de producció dels productes inclosos en entitats associatives en el càlcul dels costos de producció a nivell d'entitat associativa.

Al seu torn, amb el redactat plantejat, es modifica el punt 2 de l'article 11 bis per simplificar administrativament el registre de contractes alimentaris, eliminant l'obligació del registre immediat i suposant això una millora respecte la càrrega administrativa pels operadors de la cadena.

A més, s'incorpora un article 12 quater nou dedicat en exclusiva a la prohibició de la revenda a pèrdues a la cadena alimentària, la qual també incorpora en la seva definició, tant el preu de compra del producte com els costos fixos i variables de la comercialització dels aliments. Excepció que contempla els consumidors, per estar en aquesta situació ja regulada a la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista.

Consegüentment, amb l'objectiu de donar rigidesa i seguretat jurídica a la nova prohibició proposada, es modifica l'article 23 de manera que la revenda a pèrdues passa a considerar-se una infracció greu en matèria de contractació alimentària.

Tanmateix, s'estableix a través de la nova disposició addicional vuitena, el percentatge de quota de mercat en la cadena alimentària que suposa disposar de posició dominant, possibilitant d'aquesta manera acotar i actuar contra qui s'aprofiti d'aquesta per realitzar alguna de les pràctiques abusives recollides en la vigent Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.

També, s'introdueix una nova disposició addicional novena, per la qual s'inclou un mecanisme de definició d'estàndards de costos de producció mitjans, homologables a nivell d'estat, perquè puguin ser el punt de partida de la negociació i formalització de qualsevol contracte.

Finalment, a través d'una nova disposició transitòria tercera, s'aplicarà un coeficient inicial del deu per cent mentre el ministeri competent en matèria d'agricultura, ramaderia i alimentació no determini el coeficient o coeficients, per producte o sector, previstos al segon paràgraf de l'article 12.

Per tot això, es presenta següent Proposició de Llei.

*Article únic. Modificació de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.*

Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària resta redactada de la manera següent:

U. S'afegeix un nou apartat 3 bis a l'Article 2. Àmbit d'aplicació, que resta redactat de la manera següent:

«3 bis. L'àmbit d'aplicació del capítol II del títol II d'aquesta llei també serà aplicable als dipòsits mercantils de productes agrícoles i alimentaris regulats en el Codi de Comerç, així com els apartats 1 i 2 de l'article 8 i les lletres a), b), d), e), f), g), h), i), k) i l) de l'apartat 1 de l'article 9.»

Dos. Es modifica l'apartat c) del punt 1 de l'Article 9. Condicions contractuals, que resta redactat de la manera següent:

c) Preu del contracte alimentari, amb expressa indicació de tots els pagaments, inclosos els descomptes aplicables, que es determinarà en quantia fixa i/o variable, en funció únicament de factors objectius, verificables, no manipulables i expressament establerts en el contracte, que en cap cas puguin ser manipulables pel propi operador o altres operadors del sector o fer referència a preus participats.

El preu del contracte alimentari que hagi de percebre un productor primari o una agrupació d'aquests haurà de ser, en tot cas, superior al total de costos assumits pel productor o la cooperativa o una altra entitat associativa o cost efectiu de producció, que inclourà tots els costos assumits per a desenvolupar la seva activitat, entre

altres, el cost de llavors i plantes de viver, fertilitzants, fitosanitaris, pesticides, combustibles i energia, maquinària, reparacions, costos de reg, aliments per als animals, despeses veterinàries, amortitzacions, interessos dels préstecs i productes financers, treballs contractats i mà d'obra assalariada o aportada pel propi productor o per membres de la seva unitat familiar i altres costos de funcionament de la cooperativa o una altra entitat associativa.

La determinació del cost efectiu haurà de realitzar-se prenent com a referència el conjunt de la producció comercialitzada per a la totalitat o part del cicle econòmic o productiu, que s'imputarà en la forma en què el proveïdor consideri que millor s'ajusta a la qualitat característiques dels productes objecte de cada contracte.»

Tres. Es modifica el punt 2 de l'Article 11 bis. Registre de contractes alimentaris, que resta redactat de la manera següent:

«2. L'operador que comprí als productors primaris i les agrupacions d'aquests estarà obligat a inscriure cada contracte alimentari que realitzi, i les seves modificacions, pels mitjans electrònics que es disposin reglamentàriament, en un termini de tres mesos des del lliurament del producte objecte del contracte quan es tracti d'un contracte amb lliuraments continuats, o al mes en cas de lliuraments puntuals.»

Quatre. Es modifica el punt 1 de l'Article 12 ter. Destrucció de valor en la cadena que resta redactat de la manera següent:

«1. Amb la finalitat d'evitar la destrucció del valor en la cadena alimentària, cada operador de la mateixa haurà de pagar a l'operador immediatament anterior un preu igual o superior al cost de producció de tal producte en què efectivament hagi incorregut o assumit aquest operador. L'acreditació es realitzarà conforme als mitjans de prova admesos en Dret.

A l'efecte d'acreditació d'aquests costos de producció en el sector primari, els operadors podran utilitzar els valors que, per a cada producte i campanya siguin publicats pels organismes estatals que tinguin atribuïda aquesta funció, així com els observatoris alimentaris oficials que realitzen aquesta funció en els respectius territoris de les comunitats autònomes.»

Cinc. S'afegeix un nou Article 12 quater. Revenda a pèrdua, que resta redactat de la manera següent:

«Article 12 quater. *Revenda a pèrdua.*

1. En les activitats de comerç o la transformació de productes agraris i alimentaris, no es podran oferir ni realitzar revendes amb pèrdua.

2. Això no serà aplicable als productors agropecuaris quan vinguin de manera directa als consumidors com a la resta de la cadena alimentària, incloses els lliuraments a les cooperatives i organitzacions de productors de les quals siguin membres.

3. Als efectes assenyalats en el paràgraf anterior es considerarà que existeix revenda a pèrdua, quan el preu aplicat a un producte sigui inferior al d'adquisició segons factura, deduïda la part proporcional dels descomptes que figurin en aquesta, si aquests es corresponen amb les pràctiques comercials lleials i de bona fe, incrementat pels costos fixos i variables efectius, com l'emmagatzematge, la preparació, l'envasament, la transformació o comercialització, inclosos els realitzats pel propi comprador, així com les quotes dels impostos indirectes que gravin l'operació.

4. No obstant això, atès que comporta dificultats pràctiques establir els costos fixos i variables efectius de cada operador, el ministeri competent en matèria d'agricultura, ramaderia i alimentació establirà d'acord amb criteris objectius i basats

# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

## CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 75-1

15 de marzo de 2024

Pág. 12

en estudis actualitzats sobre la cadena alimentària, un coeficient o coeficients per a determinarlos.

5. No es computaran, a l'efecte de la deducció en el preu a què es refereix el paràgraf anterior, les retribucions o les bonificacions de qualsevol tipus que signifiquin compensació per serveis prestats.

6. En cap cas, les ofertes conjuntes o els obsequis als compradors podran utilitzar-se per a evitar l'aplicació del que es disposa en aquest article.»

Sis. S'afegeix una nova lletra r) en el punt 2 de l'Article 23. Infraccions en matèria de contractació alimentària, amb el següent contingut:

«r) La realització d'ofertes o de revendes amb pèrdua de manera contrària al que s'estableix en l'article 12 quarter.»

Set. S'afegeix una nova disposició addicional octava, que resta redactada de la manera següent:

«Disposició addicional octava. *Posició dominant.*

A l'efecte del que es preveu en la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, s'entendrà per "posició dominant" en la cadena alimentària la posició de força econòmica de què gaudeix una empresa i que li permet obstaculitzar el manteniment d'una competència efectiva en el mercat, en disposar d'una quota del 8% que li dona el poder per a actuar amb una considerable independència enfront dels seus competidors, clients i, en última instància, enfront dels consumidors.»

Vuit. S'afegeix una nova disposició addicional novena, que resta redactada de la manera següent:

«Disposició addicional novena. *Determinació de costos i preus indicatius.*

Amb la finalitat de disposar de mecanismes oficials de captació de costos indicatius, a l'efecte del que s'estableix en les lletres c) i j) de l'apartat 1 de l'article 9 i dels articles 12 ter i 12 quarter, així com preus indicatius, tots ells vàlids estadísticament:

a) S'estableix el caràcter obligatori de les dades estadístiques per a la determinació dels costos a l'efecte del que s'estableix en les lletres c) i j) de l'apartat 1 de l'article 9 i dels articles 12 ter i 12 quarter, així com, dels preus que les normes de la política agrícola comuna estableixen de notificació obligatòria a la Comissió Europea.

b) L'elaboració de les dades estadístiques previstes en la lletra a) anterior correspon al ministeri competent en matèria d'agricultura, ramaderia i alimentació.

c) El col·lectiu de persones físiques i jurídiques que abasta l'obligació establerta en la lletra a) anterior com a univers estadístic són els operadors del sector alimentari pertanyents a la cadena alimentària espanyola, entre els quals el ministeri competent en matèria d'agricultura, ramaderia i alimentació establirà una mostra estadísticament representativa.

d) El ministeri competent en matèria d'agricultura, ramaderia i alimentació efectuarà les remodelacions pressupostàries necessàries per a atendre la posada en marxa de l'estadística obligatòria establerta en la lletra a) anterior en el termini màxim d'un mes donis de la publicació en el "Butlletí Oficial de l'Estat" de la present Llei.

# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

## CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 75-1

15 de marzo de 2024

Pág. 13

e) En el termini màxim de sis mesos, el ministeri competent en matèria d'agricultura, ramaderia i alimentació disposarà dels estudis actualitzats per a determinar el coeficient o coeficients previstos en l'article 12 quarter.

f) El Govern procedirà com més aviat millor a la modificació de l'annex 2 del Reial decret 410/2016, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla Estadístic Nacional, perquè a partir de la campanya 2024, la captura de costos i preus de seguiment del mercat i de la cadena alimentària espanyola sigui inclosa en el Pla Estadístic Nacional.

Així mateix, els operadors de la cadena alimentària espanyola quedaran obligats a subministrar les dades sobre costos i preus que l'Administració els requereixi. Aquesta obligació es desenvoluparà normativament en un termini no superior a tres mesos des de la publicació en el "Butlletí Oficial de l'Estat" de la present Llei.»

Nou. S'afegeix una nova disposició transitòria tercera, que resta redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria tercera. *Coefficient inicial dels costos fixos i variables.*

Mentre el ministeri competent en matèria d'agricultura, ramaderia i alimentació no determini el coeficient o coeficients, per producte o sector, previstos en el segon paràgraf de l'article 12 ter de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, a l'efecte del que s'estableix en el primer paràgraf de l'article 12 ter de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, s'aplicarà un coeficient inicial del deu per cent.»

Disposició final primera. *Caràcter supletori.*

La present Llei revesteix caràcter supletori respecte de les disposicions que les Comunitats Autònomes, a l'empara del que s'estableix en els seus Estatuts d'Autonomia, dictin sobre la mateixa matèria.

S'exceptua el caràcter supletori respecte dels preceptes de la present Llei dictats a l'empara de les competències exclusives de l'Estat, de conformitat amb l'article 149.1 de la Constitució.

Disposició final segona. *Entrada en vigor.*

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».